

Resolución que emite el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto de la solicitud de enajenación de acciones de la empresa Japifon, S.A. de C.V., titular de una concesión única para uso comercial.

Antecedentes

Primero.- Decreto de Reforma Constitucional. El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “*Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones*”, mediante el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Instituto), como un órgano autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

Segundo.- Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “*Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión*”, mismo que entró en vigor el 13 de agosto de 2014.

Tercero.- Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “*Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones*” (Estatuto Orgánico), mismo que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014.

Cuarto.- Otorgamiento de la Concesión. El 8 de noviembre de 2023, el Instituto otorgó a favor de Japifon, S.A. de C.V. un título de concesión única para uso comercial, con una vigencia de 30 (treinta) años contados a partir del 16 de noviembre de 2023, con el que actualmente presta los servicios de mensajes cortos y comercialización de la capacidad adquirida de otros concesionarios a nivel nacional.

Quinto.- Solicitud de Enajenación de Acciones. El 13 de enero de 2024, Japifon, S.A. de C.V. presentó, a través de la funcionalidad “*Más Trámites y Servicios*” contenida en la Ventanilla Electrónica del Instituto, el aviso de intención para llevar a cabo la enajenación de la totalidad de las acciones propiedad de las CC. María Domitila Gutiérrez Celis, Mónica Carbajal Delgado y Pamela Arellano Franco, a favor de los CC. Georgina Reyes Gutiérrez, Freddy Rojas Alcantar y Augusto Antonio Lozada Carrasquel (Solicitud de Enajenación de Acciones).

Sexto.- Solicitud de Opinión Técnica. Mediante oficio IFT/223/UCS/286/2024, notificado el 19 de enero de 2024 a través de correo electrónico, el Instituto solicitó a la Secretaría la opinión técnica correspondiente a la Solicitud de Enajenación de Acciones, de conformidad con lo

establecido por el artículo 28, párrafo décimo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución).

Séptimo.- Solicitud de Opinión a la Unidad de Competencia Económica. Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/85/2024, notificado el 23 de enero de 2024 vía correo electrónico, la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones, adscrita a la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto, solicitó a la Dirección General de Concentraciones y Concesiones de la Unidad de Competencia Económica la opinión en materia de competencia económica respecto de la Solicitud de Enajenación de Acciones.

Octavo.- Opinión de la Unidad de Competencia Económica. Mediante oficio IFT/226/UCE/DG-CCON/045/2024, notificado vía correo electrónico el 20 de febrero de 2024 a la Unidad de Concesiones y Servicios, la Dirección General de Concentraciones y Concesiones remitió la opinión correspondiente a la Solicitud de Enajenación de Acciones.

Noveno.- Opinión Técnica de la Secretaría. El 22 de febrero de 2024, mediante oficio 2.1.2.-079/2024, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría remitió el diverso 1.-069 de fecha 21 de febrero de 2024, el cual contiene la opinión de dicha dependencia respecto de la Solicitud de Enajenación de Acciones.

En virtud de los antecedentes referidos, y

Considerando

Primero.- Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28, párrafo décimo séptimo, de la Constitución, corresponde al Instituto el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Asimismo, de conformidad con el párrafo décimo sexto del citado artículo, el Instituto es la autoridad en la materia de competencia económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que, entre otros aspectos, regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.

Ahora bien, el artículo 112 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley) establece que en cualquier supuesto de suscripción o enajenación de acciones o partes sociales

en un acto o sucesión de actos, que represente el diez por ciento o más del monto de su capital social y siempre que no se actualice la obligación de notificar la operación conforme a lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica (Ley de Competencia), el concesionario estará obligado a dar aviso al Instituto de la intención de los interesados en realizar la suscripción o enajenación de las acciones o partes sociales, ya sea directa o indirectamente, debiendo acompañar el aviso con la información detallada de las personas interesadas en adquirir las acciones o partes sociales.

De igual manera, corresponde al Pleno del Instituto, conforme a lo establecido en los artículos 15, fracción IV, y 17, fracción I, de la Ley, la facultad de autorizar cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones.

En este sentido, en términos de los artículos 32 y 33, fracción IV, del Estatuto Orgánico corresponde a la Unidad de Concesiones y Servicios, a través de la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones, tramitar y evaluar, entre otros, los cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de telecomunicaciones para someterlas a consideración del Pleno del Instituto, previa opinión de la Unidad de Competencia Económica.

En este orden de ideas, considerando que el Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión de las telecomunicaciones, así como la facultad de autorizar cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones, el Pleno, como órgano máximo de gobierno y decisión del Instituto, se encuentra plenamente facultado para resolver la Solicitud de Enajenación de Acciones.

Segundo.- Marco legal aplicable a la Solicitud de Enajenación de Acciones. De conformidad con lo antes señalado, la normatividad aplicable que establece los requisitos de procedencia para solicitar la autorización para llevar a cabo la enajenación o suscripción de acciones o partes sociales del capital de una empresa se encuentra contenida en el artículo 112 de la Ley, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 112. El concesionario, cuando sea una persona moral, presentará al Instituto, a más tardar el treinta de junio de cada año, su estructura accionaria o de partes sociales de que se trate, con sus respectivos porcentajes de participación, acompañando además una relación de los accionistas que sean titulares del cinco por ciento o más del capital social de la empresa, así como el nombre de las personas físicas que participen directa o indirectamente con el diez por ciento o más del capital social de la empresa, sus principales accionistas y sus respectivos porcentajes de participación, a la que acompañará la información en el formato que determine el Instituto.

En cualquier supuesto de suscripción o enajenación de acciones o partes sociales en un acto o sucesión de actos, que represente el diez por ciento o más del monto de su capital social, y siempre que no se actualice la obligación de notificar la operación conforme a lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, el concesionario estará obligado a observar el régimen siguiente:

- I. *El concesionario deberá dar aviso al Instituto de la intención de los interesados en realizar la suscripción o enajenación de las acciones o partes sociales, ya sea directa o indirectamente,*

debiendo acompañar el aviso con la información detallada de las personas interesadas en adquirir las acciones o partes sociales;

- II. El Instituto tendrá un plazo de diez días hábiles contados a partir de la presentación del aviso, para solicitar la opinión de la Secretaría;*
- III. La Secretaría tendrá un plazo de treinta días naturales para emitir opinión, y*
- IV. El Instituto tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de que reciba la opinión de la Secretaría o en caso que no se hubiere emitido opinión, a partir de que fenezca el plazo referido en la fracción que antecede, para objetar con causa justificada la operación de que se trate. Transcurrido dicho plazo sin que la operación hubiere sido objetada por el Instituto, se tendrá por autorizada.*

Las operaciones que no hubieren sido objetadas por el Instituto deberán inscribirse en el libro de registro de accionistas o socios de la persona moral, sin perjuicio de las autorizaciones que se requieran de otras autoridades conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

[...]

[...]

En caso de que el interesado en suscribir o adquirir acciones o partes sociales sea una persona moral, en el aviso al que se refiere la fracción I de este artículo, deberá presentar la información necesaria para que el Instituto conozca la identidad de las personas físicas que tengan intereses patrimoniales mayores al diez por ciento del capital de dicha persona moral.

En caso de que se actualice la obligación de notificar una concentración conforme a lo previsto en la Ley Federal de Competencia Económica, el Instituto dará trámite a la solicitud conforme a lo previsto para dicho procedimiento en la ley de la materia, considerando además los criterios establecidos en esta Ley.

[...]”.

Ahora bien, cabe destacar que para este tipo de solicitudes debe acatarse el requisito de procedencia establecido en el artículo 174-C, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, correspondiente al pago de derechos relativo a la suscripción o enajenación de acciones o partes sociales de las concesiones en materia de telecomunicaciones, como es el caso que nos ocupa.

Tercero.- Concentración. Como se señaló en el Considerando Primero de la presente Resolución, el Instituto es la autoridad en la materia de competencia económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones por lo que en estos ejercerá, en forma exclusiva, las facultades que las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados, con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. constitucionales.

En este sentido, la Ley en el artículo 112 establece como regla general la obligación que tienen a su cargo todos los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión de observar el régimen para cualquier supuesto de suscripción o enajenación de acciones o partes sociales en un acto o

sucesión de actos, que represente el diez por ciento o más del monto de su capital social; siempre y cuando no se actualice la obligación del concesionario de notificar al Instituto una concentración conforme a lo previsto en la Ley de Competencia.

Asimismo, el artículo 61 de la Ley de Competencia señala qué se entiende por concentración: la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos.

En este tenor, el artículo 86 de la Ley de Competencia ordena textualmente lo siguiente:

“Artículo 86. Las siguientes concentraciones deberán ser autorizadas por la Comisión antes de que se lleven a cabo:

- I. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, independientemente del lugar de su celebración, importen en el territorio nacional, directa o indirectamente, un monto superior al equivalente a dieciocho millones de veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal;*
- II. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, impliquen la acumulación del treinta y cinco por ciento o más de los activos o acciones de un Agente Económico, cuyas ventas anuales originadas en el territorio nacional o activos en el territorio nacional importen más del equivalente a dieciocho millones de veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, o*
- III. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen impliquen una acumulación en el territorio nacional de activos o capital social superior al equivalente a ocho millones cuatrocientos mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal y en la concentración participen dos o más Agentes Económicos cuyas ventas anuales originadas en el territorio nacional o activos en el territorio nacional conjunta o separadamente, importen más de cuarenta y ocho millones de veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal.*

Los actos realizados en contravención a este artículo no producirán efectos jurídicos, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal de los Agentes Económicos y de las personas que ordenaron o coadyuvaron en la ejecución, así como de los fedatarios públicos que hayan intervenido en los mismos.

Los actos relativos a una concentración no podrán registrarse en los libros corporativos, formalizarse en instrumento público ni inscribirse en el Registro Público de Comercio hasta que se obtenga la autorización favorable de la Comisión o haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 90, fracción V, sin que el Pleno haya emitido resolución.

Los Agentes Económicos involucrados que no se encuentren en los supuestos establecidos en las fracciones I, II y III de este artículo podrán notificarla voluntariamente a la Comisión”.

Como se desprende del citado precepto, únicamente los casos que encuadren en los supuestos normativos indicados en las fracciones I, II y III del mismo, deberán ser autorizados previamente por el Instituto en términos de los artículos 5 y 87 de la Ley de Competencia; de igual forma, los Agentes Económicos que participen directamente en la concentración de que se trate están obligados a notificarla al Instituto, tal y como lo dispone el artículo 88 de la Ley de Competencia.

En ese contexto, la Dirección General de Concentraciones y Concesiones remitió la opinión correspondiente a la Solicitud de Enajenación de Acciones a través del oficio IFT/226/UCE/DG-CCON/045/2024, notificado el 20 de febrero de 2024 vía correo electrónico, concluyendo lo siguiente:

[...]

4. Análisis y opinión en materia de competencia económica de la Operación

A partir de la información remitida por la UCS y la disponible para la UCE, se tienen los siguientes elementos:

- *La Operación consiste en la enajenación de la totalidad de las acciones de las que son titulares las Enajenantes -cada una, 15,000 (quince mil) acciones-, que en conjunto representan el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social de Japifon, a favor de: Freddy Rojas Alcantar -25,200 (veinticinco mil doscientas) acciones-, Georgina Reyes Gutiérrez -17,400 (diecisiete mil cuatrocientas) acciones-, y Augusto Antonio Lozada Carrasquel -2,400 (dos mil cuatrocientas) acciones-.*

Con motivo de la Operación, las CC. María Domitila Gutiérrez Celis, Mónica Carbajal Delgado y Pamela Arellano Franco, dejan de tener participación en el capital social de Japifon, mientras que el C. Augusto Antonio Lozada Carrasquel incrementaría su participación accionaria de 25% (veinticinco por ciento) a 29% (veintinueve por ciento), y los CC. Freddy Rojas Alcantar y Georgina Reyes Gutiérrez ingresarían como accionistas con una participación del 42% (cuarenta y dos por ciento) y 29% (veintinueve por ciento), respectivamente, en el capital social de esa sociedad.

- *Japifon es titular de 1 (una) concesión única para uso comercial que le permite brindar servicios de telecomunicaciones.*
- *A partir de la información disponible, y tomando en consideración los elementos presentados por el Solicitante, no se identifica que los Adquirentes, sus GIE o personas Vinculadas/Relacionadas a los mismos, además de Japifon, en la cual, antes de la Operación el C. Augusto Antonio Lozada Carrasquel tiene una participación del 25% (veinticinco por ciento), lleven a cabo actividades en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en territorio nacional.*

Con base en lo anterior, como consecuencia de la Operación no se prevén efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones en las localidades donde el Solicitante tiene cobertura de servicio.

[...].”

Con base en la información disponible, se determina que la operación consistente en la enajenación de las acciones representativas del 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social de Japifon, S.A. de C.V., que son propiedad de las CC. María Domitila Gutiérrez Celis, Mónica Carbajal Delgado y Pamela Arellano Franco, a favor de los CC. Freddy Rojas Alcantar, Georgina Reyes Gutiérrez y Augusto Antonio Lozada Carrasquel, previsiblemente no tendría efectos contrarios al proceso de competencia y libre concurrencia en las localidades donde la concesionaria presta servicios públicos de telecomunicaciones y/o radiodifusión. Ello en virtud de

los siguientes elementos: (i) Japifon, S.A. de C.V. es titular de una concesión única para uso comercial para prestar servicios de telecomunicaciones con cobertura a nivel nacional, (ii) después de la operación, el C. Augusto Antonio Lozada Carrasquel incrementaría su participación accionaria de 25% (veinticinco por ciento) a 29% (veintinueve por ciento), y los CC. Freddy Rojas Alcantar y Georgina Reyes Gutiérrez ingresarían como accionistas con una participación del 42% (cuarenta y dos por ciento) y 29% (veintinueve por ciento), respectivamente, en el capital social de la concesionaria, y (iii) no se identifica que los CC. Freddy Rojas Alcantar, Georgina Reyes Gutiérrez y Augusto Antonio Lozada Carrasquel, sus grupos de interés económico o personas vinculadas/relacionadas a los mismos, además de Japifon, S.A. de C.V., en la cual, antes de la operación el C. Augusto Antonio Lozada Carrasquel tiene una participación del 25% (veinticinco por ciento), lleven a cabo actividades en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en territorio nacional.

Cuarto.- Análisis de la Solicitud de Enajenación de Acciones. De la revisión al marco legal aplicable, se concluye que los requisitos de procedencia que debe cumplir el concesionario que solicite autorización para llevar a cabo la suscripción o enajenación de acciones o partes sociales del capital, son los siguientes:

- i. Que el titular de la concesión dé aviso al Instituto por escrito que pretende llevar a cabo una enajenación o suscripción de acciones o partes sociales, debiendo acompañar el mismo con la información detallada de las personas interesadas en adquirir las acciones o partes sociales.
- ii. Que el concesionario exhiba comprobante del pago de derechos establecido en la Ley Federal de Derechos.
- iii. Que se solicite a la Secretaría la opinión técnica no vinculante, prevista en el artículo 28, párrafo décimo séptimo, de la Constitución y el artículo 112, párrafo segundo, fracción II, de la Ley, respecto de la solicitud de enajenación o suscripción que se presente.

En cuanto al requisito marcado con el numeral i), se desprende que en el expediente administrativo consta el escrito presentado por Japifon, S.A. de C.V., el 13 de enero de 2024, mediante los cuales dio aviso de la intención para llevar a cabo la enajenación de la totalidad de las acciones propiedad de las CC. María Domitila Gutiérrez Celis, Mónica Carbajal Delgado y Pamela Arellano Franco, a favor de los CC. Georgina Reyes Gutiérrez, Freddy Rojas Alcantar y Augusto Antonio Lozada Carrasquel.

Al respecto, de conformidad con la información que obra en el expediente abierto en el Instituto a nombre de la concesionaria, la estructura accionaria de Japifon, S.A. de C.V. está compuesta de la siguiente manera:

Accionista	Acciones	%
María Domitila Gutiérrez Celis	15,000	25
Mónica Carbajal Delgado	15,000	25
Pamela Arellano Franco	15,000	25
Augusto Antonio Lozada Carrasquel	15,000	25
Total	60,000	100

En relación con lo anterior, la operación solicitada consiste en llevar a cabo la enajenación de la totalidad de las acciones conforme a lo siguiente:

Accionista	Número de acciones a enajenar	Adquiriente
María Domitila Gutiérrez Celis	15,000	Georgina Reyes Gutiérrez
Mónica Carbajal Delgado	15,000	Freddy Rojas Alcantar
Pamela Arellano Franco	10,200	Freddy Rojas Alcantar
Pamela Arellano Franco	2,400	Georgina Reyes Gutiérrez
Pamela Arellano Franco	2,400	Augusto Antonio Lozada Carrasquel

De autorizarse la Solicitud de Enajenación de Acciones y una vez que ésta se concrete, la estructura accionaria de Japifon, S.A. de C.V. quedaría de la siguiente forma:

Accionista	Acciones	%
Freddy Rojas Alcantar	25,200	42
Georgina Reyes Gutiérrez	17,400	29
Augusto Antonio Lozada Carrasquel	17,400	29
Total	60,000	100

Por lo que se refiere al segundo requisito de procedencia, destaca que, con el escrito presentado ante el Instituto el 13 de enero de 2024, Japifon, S.A. de C.V. exhibió las facturas números 230012726 y 240000280 por el estudio y, en su caso, la autorización de solicitudes de modificaciones técnicas, administrativas, operativas y legales, relativas a la suscripción o enajenación de acciones o partes sociales que requiera autorización en términos de la Ley, atendiendo de esta forma a lo dispuesto por el artículo 174-C, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos.

Finalmente, en relación con lo señalado en el párrafo décimo séptimo del artículo 28 de la Constitución, a través del oficio IFT/223/UCS/286/2024, notificado el 19 de enero de 2024 a través de correo electrónico, el Instituto solicitó a la Secretaría la opinión técnica correspondiente a la Solicitud de Enajenación de Acciones. Al respecto, el 22 de febrero de 2024 mediante oficio 2.1.2.-079/2024, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría notificó el diverso 1.-069, mediante el cual dicha dependencia emitió la opinión técnica sin formular objeción alguna respecto de la Solicitud de Enajenación de Acciones.

En virtud de esto, y toda vez que Japifon, S.A. de C.V. satisface la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 112 de la Ley, el Instituto considera procedente autorizar la Solicitud de Enajenación de Acciones presentada por dicha concesionaria.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción IV, 7, 15, fracción IV, 17, fracción I, 112 y 177, fracción XI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 5 y 86 de la Ley Federal de Competencia Económica; 35, fracción II, 36, 38, 39 y 57, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 1, 6, fracción XXXVIII, 32, 33, fracción IV, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los Lineamientos Primero, Tercero, Cuarto, Décimo Octavo, Vigésimo y Vigésimo Primero de los “Lineamientos para la sustanciación de los trámites y servicios que se realicen ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de la Ventanilla Electrónica” publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2019, el Pleno de este Instituto expide la siguiente:

Resolución

Primero.- Se autoriza a Japifon, S.A. de C.V. a llevar a cabo la enajenación de acciones solicitada, en términos de lo señalado en el Considerando Cuarto de la presente Resolución, a efecto de que la estructura accionaria de dicha concesionaria, posterior al movimiento solicitado, quede de la siguiente manera:

Accionista	Acciones	%
Freddy Rojas Alcantar	25,200	42
Georgina Reyes Gutiérrez	17,400	29
Augusto Antonio Lozada Carrasquel	17,400	29
Total	60,000	100

Segundo.- Se instruye a la Unidad de Concesiones y Servicios a notificar a Japifon, S.A. de C.V. la autorización para llevar a cabo la enajenación de acciones a que se refiere la presente Resolución de conformidad con el Resolutivo Primero.

Tercero.- La presente autorización tendrá una vigencia de 6 (seis) meses contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la misma.

Dentro de este plazo de vigencia, Japifon, S.A. de C.V. deberá presentar, para su inscripción en el Registro Público de Concesiones, copia certificada del instrumento en el que conste que se llevaron a cabo los movimientos a que se refiere el Resolutivo Primero, en términos del artículo 177, fracción XI, en relación con el artículo 180 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser prorrogado por una sola ocasión en términos de lo establecido por el artículo 31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Concluido dicho plazo, sin que hubiere dado cumplimiento al presente Resolutivo, Japifon, S.A. de C.V. deberá solicitar una nueva autorización.

Javier Juárez Mojica
Comisionado Presidente*

Arturo Robles Rovalo
Comisionado

Sóstenes Díaz González
Comisionado

Ramiro Camacho Castillo
Comisionado

Resolución P/IFT/060324/91, aprobada por unanimidad en la VII Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, celebrada el 06 de marzo de 2024.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 16, 23, fracción I y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

* En suplencia por ausencia del Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, suscribe el Comisionado Javier Juárez Mojica, con fundamento en el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

